

Enero 1982

El hecho más destacado en la vida nacional durante el mes de enero sería el inicio de la última etapa del proceso electoral para la Asamblea Constituyente. Como espaldarazo al mismo y, sobre todo, al partido gobernante, se presentó en el país una delegación venezolana del más alto nivel, presidida por el Canciller Zambrano, gran parte de su equipo ministerial y la suprema representatividad de la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) con su Secretario General, Emilio Máspero, a la cabeza. El canciller manifestó que venía en viaje político, y tras reuniones con la Junta, el PDC y el Alto Mando militar salvadoreño, apareció ante las cámaras de TV en un discurso con tintes de campaña electoral a favor de Duarte y su partido. Al mismo tiempo se aprobaba un préstamo de 10 millones de dólares, y se prometía el estudio de otros préstamos venezolanos por valor superior a los 87 millones de la misma moneda. Los delegados de la CLAT también mostraron su apoyo a las elecciones, siempre que se tome en cuenta a los trabajadores.

El Consejo Central de Elecciones, tal como había previsto y anunciado, emitió el decreto No. 1, por el que se convoca a las elecciones para el día 28 de marzo. Como no hay listados de votantes, se ha optado por manchar un dedo del elector —que podrá depositar su papeleta en cualquier lugar y mesa del país— con tinta indeleble. Días más tarde fue renovado una vez más el Estado de Sitio. Como novedad importante, hay que destacar que los canales oficiales y comerciales de TV han concedido espacios gratuitos a todos los

partidos, así como la radio nacional. En la fecha indicada, se inició la campaña electoral, precedida la noche anterior por el asesinato del máximo dirigente del PCN, Lic. Rafael Rodríguez González. Si bien la “Voz de los Estados Unidos de América” (Radio Washington) afirmó que la campaña se estaba llevando con civismo y “altura”, la realidad es que pocas veces se habrá visto en el país una campaña más indigna, en la que los partidos se reducen a atacarse unos a otros con una tasa muy elevada de agresividad, y algunos acuden a insultos de la más baja ralea. En una cosa coinciden todos los contendientes: todos se manifiestan anticomunistas y todos también tratan de halagar a la institución armada —hasta el punto de que el general García tuviera que llegar a pedir que no se utilice a dicha institución sino que se hagan planteamientos políticos y programáticos—; en otro punto hay una profunda división: todos los partidos “opositores” se aúnan en atacar al PDC, mientras éste hace lo posible por defenderse y acusar a sus adversarios.

Aunque los partidos inscritos (o en formación) parece que sí han decidido participar en las elecciones, sin embargo siguen presentando algunas quejas sobre su procedimiento. El PAR hizo declaraciones en el sentido de que los únicos partidos de oposición son el MNR, el UDN y el suyo, mientras que los demás no son más que elitistas y antipedecistas. El PCN acusó al PDC de hacer fraude con las cédulas y de haber retirado de su trabajo en algunas alcaldías a personas que

no apoyaban al partido oficial. El PPS desmintió que el no haber enviado delegados para integrar el Consejo de Vigilancia significara un voto de confianza en el CCE, sino todo lo contrario. El PAR denunció la censura previa a la campaña. ARENA pidió unidad contra el oportunismo del PDC. En fin, un nuevo partido en formación, ECO (Empresarios, Campesinos y Obreros), dio a conocer sus bases programáticas bien concretas, que frente a la realidad que está viviendo el país más parecían una "carta al Niño Dios" escrita en algún país escandinavo.

Diversas asociaciones gremiales y de otra índole también dejaron oír su palabra sobre las elecciones. ANEP se declaró a favor del proceso, e invitó a votar para que en la nueva constituyente hubiera mayoría de "republicanos y demócratas". La UPD se manifestó en el sentido de que el proceso electoral podía ser una vía de solución a los problemas de la clase trabajadora, pero que no apoya ni respalda a ningún partido, y que se mostrará vigilante para defender los derechos del pueblo trabajador y para que no se vuelva al pasado. La CTS se pronunció a favor de los comicios, como un posible camino, aunque ninguno de los partidos contendientes representan al pueblo —pero escogerían el mal menor—. Los más altos dirigentes político-diplomáticos del FDR-FMLN, por su parte, manifestaron que las elecciones no resolverán nada, agravarán el conflicto, pero tal vez abran los ojos de la conciencia internacional y obliguen a los Estados Unidos y al gobierno a negociar. El coronel Majano, desde México, escribió un documento fechado el primero de enero de este año, en el que analiza el proceso salvadoreño en los últimos años, explica las causas del fracaso del "15 de octubre", trata de esclarecer a sus compañeros de armas lo ocurrido desde entonces, y sostiene que ni la guerra ni las elecciones son solución para el país ni para la institución armada; sólo una negociación puede traer la verdadera solución, a su criterio.

La Iglesia jerárquica también dijo su palabra. La Conferencia Episcopal (CEDÉS) emitió un comunicado en el que repite las ideas y tesis oficiales, llegando incluso a "obligar en conciencia" a los católicos a votar. Mons. Rivera comparó el mundo de las campañas electorales con el mundo real de la

represión y las tensiones, resaltó la poca credibilidad que los mismos partidos atribuyen al proceso electoral, y pidió que se analizara la realidad del país con objetividad. El sustituto en su homilía de catedral puso en duda la credibilidad del proceso, dada la experiencia histórica salvadoreña, y sostuvo que el resultado, cualquiera que fuese, no significaría el fin de la guerra, y más bien podría ser un instrumento más de violencia y represión.

Otro suceso importante del mes fue la agria polémica suscitada entre la empresa privada y el gobierno. La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador publicó el documento "La realidad económica nacional de 1979 a 1981 y sus proyecciones para el año 1982", en la que exponía la crisis económica vigente y achacaba al gobierno buena parte de la culpa. Las principales asociaciones empresariales la respaldaron —y salieron en su defensa ulterior—. El Ing. Duarte, por la TV atacó duramente el documento, y acusó a la Cámara y al gran capital de "retrógrados" y de otros calificativos ideológicos. La Cámara anunció contestación —que la daría más adelante por TV, con ataques, sobre todo, al modo de comportarse Duarte frente a ellos— y el Ministro de Planificación tuvo que salir también a dar una explicación "técnica" de la situación económica del país. —El estudio de la CEPAL sobre la crisis económica de 1981, por otro lado, presenta la situación del país con muy pocas esperanzas.

La crisis económica se refleja en el presupuesto para el presente año, inferior en más del 25 o/o al anterior, a precios constantes, con grave déficit (200 millones de colones), con disminución en las áreas sociales, a costa del incremento de los costos de la defensa. Cada vez se depende más de las ayudas y préstamos extranjeros, entre los que ya se abrió la puerta a uno de Argentina por 15 millones de dólares. Los recortes presupuestarios dieron pie a múltiples quejas, entre ellas la del Ministerio de Justicia y trabajadores de la Educación. Se ha prorrogado el Decreto 923 sobre estabilización económica, aunque se permitirá un aumento de salarios de hasta el 10 o/o a partir del 15 de febrero. Las asociaciones sindicales y laborales, por su parte, se han quejado de cierres de empresas y del aumento del desempleo. Del hospital de ANTEL han sido despedidos 21 médi-

cos especialistas por razón presupuestaria, otros empleados públicos han sido cesados en su trabajo, y muchos se quejan de tardanzas en el pago de sus salarios. El ISTA ha denunciado corrupciones millonarias en el valúo de tierras expropiadas en la reforma agraria por medio de declaraciones falsificadas de impuestos. En fin, el Tratado Bilateral Honduras-El Salvador, que agilizaba el intercambio comercial en algunos rubros, se vio entorpecido al suspenderse las conversaciones bilaterales por diferencias surgidas en su seno.

En este primer mes del año se intensificaron notoriamente las acciones, llevando la iniciativa primero el gobierno y luego el FMLN. La F.A. se declaró en emergencia para el día 10, aniversario de la "ofensiva general, y para el 22, fecha en que se cumplían los 50 años del alzamiento de 1932. De las 26 acciones de contrainsurgencia reportadas, 12 fueron operativos menores y rápidos, y 3 grandes; el primero (operación "Petronilo"), en el volcán Chinchontepec, de cuyos resultados apenas dijo nada el COPREFA; otro fue para recuperar Jocoaitique (Morazán) que estuvo tres días en poder del FMLN; y el tercero fue un operativo gigantesco en gran parte de la capital en vísperas del 22 de enero. Lo más llamativo en cuanto a represión fue el secuestro del padre del comandante Villalobos (ERP), seguido del dinamitado de su imprenta (Vanguardia) y del secuestro de otro hijo del primero; el secuestro del Dr. Manuel de Paz, médico (el 2o. en diez días), Secretario General del Sindicato del ISSS; y la masacre de San Antonio Abad en la madrugada del 31, en que elementos uniformados sacaron de sus casas a 27 personas, en su mayoría jóvenes, y aparecieron asesinados, en ropa de dormir y con las manos atadas a la espalda, aunque la F.A. dijo que habían muerto en un enfrentamiento. Total, en el mes se reportaron 539 muertos de la población civil, 102 capturados, más los que hayan caído en los operativos militares. Como compensación, o para reforzar la tesis de Reagan de que las cosas están mejorando, la Policía Nacional detuvo al ex-mayor Guillermo Roeder (el mismo que años antes hiciera un desfalco millonario cuando estaba al frente de INSAFI) y a los principales cabecillas de su banda de extorsionadores; parece que tenía una fuerza de 400 hom-

bres, para dar seguridad a empresas y acaudalados, pero a algunos de ellos los secuestraban para obtener dinero, uno fue el Sr. Bustamante, en cuyo rescate fue detenido el sudicho militar.

Pero el FMLN también incrementó sus acciones, habiendo sido contabilizadas 398 en todo el país (79 en Usulután, 71 en San Salvador, 52 en Santa Ana y 49 en San Vicente); de ellas, 84 sabotajes a la electricidad, 57 ataques a puestos militares, 39 enfrentamientos, 34 emboscadas, 26 acciones de control en las carreteras y 6 combates militares. El oriente del país fue el de mayor intensidad, con la toma de Jocoaitique, parte de la ciudad de San Miguel, fuerte ataque a Usulután, etc., pero también en el occidente ha ido cobrando fuerza, a diferencia de meses anteriores. Sin embargo, la acción más sonada fue el ataque a la fuerza aérea, en la base de Ilopango, cuando en la noche del día 27 se detonaron más de 20 bombas, que destruyeron gran parte de la flota aérea militar, según unos como el 50 o/o, y según otros hasta un 70 o/o, lo que daría pie a los Estados Unidos para reponer las pérdidas y aumentar la ayuda militar inmediata (55 millones de \$) con los fondos secretos del Presidente. Como consecuencia de las acciones, la F.A. reconocería 60 muertos en el mes (1 teniente, 1 subteniente, 3 sargentos, 3 subsergentes, 1 cabo y 51 soldados); pero tomando en cuenta diversas fuentes dignas de crédito, en el mes murieron 168 personas de cuerpos militares y paramilitares; además de eso, el FMLN anunció 11 acciones de ajusticiamiento.

En el campo internacional, como siempre, es donde se libra la batalla política de El Salvador. Y se habló, al comienzo, del viaje del canciller venezolano; el presidente, Herrera Campins, a su regreso, dijo que las elecciones son posibles, ya que su canciller llegó sin un rasguño. Estados Unidos envió delegaciones de distinto carácter, para apoyar las elecciones, lo que hicieron a satisfacción; la embajada americana publicó una reseña de los distintos partidos contendientes; pero la administración Reagan se enfrenta a dificultades internas cada día mayores en su política hacia El Salvador y hacia la cuenca del Caribe, no sólo por el déficit presupuestario, sino también por razones políticas y de derechos humanos, sobre todo cuando a

fines de mes el Presidente certificó ante el Congreso que el gobierno salvadoreño hacía "significativos esfuerzos" para realizar reformas y observar los derechos humanos, como base para la aprobación de la ayuda a este país (el general Haig sostendría que es necesario triplicar la ayuda para contrarrestar la amenaza de Cuba y Nicaragua). Como reacción a las tesis de Reagan, el Senado y el Congreso decidieron enviar delegaciones para comprobar la realidad en El Salvador, y el Consejo de Asuntos Hemisféricos de EU ha nombrado una comisión para incohar un juicio al Presidente por violación de la Constitución en su ayuda a El Salvador.

Por su parte, los cinco comandantes supremos del FMLN dirigieron una carta a Reagan en la que le piden sea consecuente y de paso a una negociación; al mismo tiempo Rubén Zamora, a nombre del FDR-FMLN sostenía ante miembros del Congreso, en Washington, que sólo con intervención directa de tropas norteamericanas se podría impedir la derrota del ejército salvadoreño, lo que no permitiría el pueblo norteamericano. En Lima se tuvo la "Conferencia Continental por la paz, la defensa de los Derechos Humanos y la libre autodeterminación en El Salvador", que concluyó desautorizando las programadas elecciones y pidiendo una negociación previa. El Primer Ministro canadiense manifestó un acuerdo fundamental con México respecto al problema de El Salvador, aunque indicó que enviarían observadores a las elecciones, a pesar de que no esté garantizado que sean libres; mientras que una delegación de parlamentarios canadienses afirmó en Costa Rica que tiene reservas sobre el proceso electoral salvadoreño, y que en diciembre abogó por negociaciones entre ambas partes contendientes.

En otro orden de cosas, en el mes de enero los cancilleres de Costa Rica, Honduras y El Salvador firmaron el documento de creación de la Comunidad Democrática Centroamericana (CDC), a pocos días de la visita del Subsecretario para Asuntos Económicos de EU, James Buckley, a Costa Rica. Los objetivos trazados son de orden económico (dinamizar y atraer inversiones), políticos (defensa de la democracia; por eso parece que no se invitó ni a Nicaragua ni a Guatemala), pero también militares, ya que se habla del

"derecho individual a recurrir a medidas de seguridad colectivas dentro del marco de los tratados vigentes" (TIAR??) (así lo declararían, implícitamente, los cancilleres de los tres países, junto con los de Colombia y Venezuela y el Subsecretario Enders, días más tarde). De hecho Nicaragua protestó, no sólo por el aislamiento, sino por considerarlo una amenaza; y Zamora dijo que "forma parte de un plan norteamericano para una intervención armada legal en el Istmo centroamericano". Los ministros de economía de C.A. se reunirán en Tegucigalpa con el fin de tratar sobre un proyecto del BID que significaría una inversión de 1.500 millones de dólares en cuatro años, a cambio de los 20.000 millones ofrecidos en el "Mini-plan Marshall".

Mientras tanto, Costa Rica se sigue debatiendo en la peor crisis económica de su historia, con peticiones de los obreros por una alza de los salarios que compense el costo de la vida. Guatemala sigue hundiéndose en la violencia y en la barbarie, a las puertas de unas nuevas elecciones entre candidatos de derechas, mientras la Comisión de Derechos Humanos de la ONU resalta las dramáticas violaciones, propiciadas o permitidas por el gobierno. Honduras se enfrenta a un serio problema de transporte cuando va a tomar posesión el nuevo Presidente, Suazo Córdova, ante la presencia de múltiples delegaciones del más alto nivel, y bajo el tutelaje de los Estados Unidos, que han incrementado su ayuda militar (y se ha puesto al frente de la institución armada a un hombre duro y fiel), para garantizar un modelo en el área, aunque la situación económica del país no augura un porvenir nada risueño.

Nicaragua es el país que más está sufriendo las consecuencias de optar por un gobierno que no parece aceptable para los intereses imperantes y dominantes en la zona: han seguido los problemas fronterizos, hasta el punto de lanzarse la calumnia de que el ejército sandinista penetró en Honduras y asesinó a 200 misquitos prófugos o refugiados; a pesar del desmentido de supremas autoridades de ambos países, se ha continuado con la campaña; Estados Unidos ha mantenido un bloqueo todavía moderado, y permite el entrenamiento en Florida de contra-revolucionarios nicaragüenses, "pues mientras no ataquen a ningún país no infringen nuestras

leyes”, como declararon autoridades locales; pero Francia decidió vender abundantes armas “no ofensivas” a Nicaragua, “para impedir que se abastezcan sólo en mercados comunistas”, como afirmara el ministro de De-

fensa francés en su visita a Washington; en fin, el gobierno sandinista denunció un complot internacional, en el que estaban implicados diplomáticos venezolanos y militares argentinos destacados en Managua.

Febrero 1982

Durante el mes de febrero el foco de atención internacional sobre El Salvador adquirió una luminosidad y relevancia desusadas, hasta el punto de que casi opacó la actividad política interna, que también se incrementó en el período, dada la proximidad de las elecciones y la intensificación de la campaña; el destino del país se está jugando no en las elecciones, sino en el ámbito internacional.

A la certificación del Sr. Reagan ante el Congreso, a finales del mes anterior, le siguieron declaraciones del general Haig y del Sr. Enders que justificaban la política sobre El Salvador, y aunque tanto Haig como la Sra. Kirckpatric y el Sr. Larry Speaks afirmaban que en estos momentos no ven la posibilidad de una intervención militar directa en C.A., funcionarios norteamericanos y corresponsales de prensa han insinuado la participación directa de militares argentino, en coordinación con USA, en Nicaragua y El Salvador. El Congreso y el Senado, sin embargo, no comparten el punto de vista del ejecutivo USA —el senador Gerry Studds, según Radio Exterior de España, habría llegado a decir: “la historia del ejército salvadoreño es muy simple: asesina, asesina, asesina, y luego miente, miente, miente para encubrir sus crímenes, y Estados Unidos está haciéndose cómplice de estos asesinatos y de su encubrimiento”.

Las tres misiones de alto nivel enviadas por el Senado y el Congreso a El Salvador tuvieron oportunidad e interés de entrevistarse con personas y entidades de diferentes tendencias, visitaron algunas cárceles y campamentos de refugiados, y regresaron a su país convencidos de que no se podía seguir enviando la ayuda militar como se estaba haciendo, de que había que profundizar las reformas y la justicia, ayudar económicamente, controlar a los militares y propiciar

una negociación. Esto daría pie a fuertes polémicas con los altos funcionarios norteamericanos, y a que el Ing. Duarte protestara, porque “USA debería respaldar a todas las democracias sin tener que ordenarles lo que deben hacer y cómo hacerlo; ahora Washington es quien decide si esta nación será entregada a los comunistas o no; esto es imperalismo; estamos perdiendo la pelea con los guerrilleros, no solamente en el país, sino en las páginas de los diarios The New York Times y The Washington Post”. El general García también declaró que esas delegaciones venían perjudicadas y a imponer su criterio. La Prensa Gráfica, los calificó de “procónsules, incautos, desconocedores e ignorantes, intervencionistas”. La ANEP, en fin, denunció severamente tales visitas y apeló a la dignidad nacional para evitar el manoseo e injerencias internacionales, a la vez que resaltaba su oposición a toda negociación.

Mientras se realizaban esas visitas, una cadena de TV en USA exhibió una filmación en la que aparecían asesores militares norteamericanos con fusiles M-16 en una zona conflictiva, cuando su asesoría se suponía que era en la construcción de puentes. El hecho provocó el revuelo pertinente, hasta el punto de que a un teniente coronel se lo repatrió y a los otros militares se les recriminó verbalmente, pero el embajador Hinton solicitó al Secretario de Estado que permitieran portar esas armas a los asesores para su defensa personal. Al mismo tiempo los dos periódicos norteamericanos más influyentes (anteriormente citados) denunciaron un plan militarista para la región, en combinación con Argentina. Como confirmación de la denuncia, el jefe del Estado Mayor salvadoreño viajó a finales del mes al país del sur, donde tuvo conversaciones con sus colegas, recibió una alta condecoración y apoyo cuando menos verbal y político (días más tarde se reuni-

rían en Brasil los cancilleres argentino y brasileño para analizar el problema salvadoreño; también el general García reconoció que Argentina ha ofrecido enviar asesores militares, pero que no piensa aceptar la oferta por el momento); el Secretario de Defensa norteamericano declaró también que su país haría todo lo necesario para impedir que El Salvador caiga en manos comunistas; el destructor "USS Deyo" retornó a bases americanas después de haber estado en el Golfo de Fonseca durante dos meses en "patrullaje de inteligencia", no sin antes ser relevado por otro navío de la misma clase; el general Nutting, jefe del Comando Sur (Panamá), declaró en San Salvador que la ayuda militar seguirá hasta cuando sea necesario, y si es preciso se incrementará al máximo; en fin, otros 450 soldados salvadoreños viajaron a USA para recibir entrenamiento allí.

A las protestas internas sobre la política norteamericana hacia El Salvador —en las que hay que incluir la del presidente de la Conferencia Episcopal Católica de aquel país, así como la resolución de la Cámara de Representantes por 396 votos contra 3 para que Reagan presione por conversaciones incondicionales entre las principales facciones políticas salvadoreñas— hay que añadir las externas: el canciller canadiense cuestionaba el envío de observadores a las elecciones, pues supondría un apoyo a las masacres recientes; el encargado de relaciones exteriores del Partido del Trabajo holandés abogó por las negociaciones, y lamentó que se suspendiera la reunión de la Internacional Socialista en Caracas por presión para que no se aceptaran a los representantes sandinistas; el canciller sueco denunció la política norteamericana, y abogó por negociaciones y por una verdadera justicia social que elimine las amenazas a la paz y estabilidad; la organización "Pax Christi" presentó a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (en Ginebra) un informe sobre las violaciones a ellos y sobre la "burla" que suponen las elecciones al mismo tiempo que "Justicia y Paz" en su 4o. Congreso Continental se opuso a la intervención militar, especialmente norteamericana —algo similar sostendrían en Managua los delegados de COPPAL en su 3a. Conferencia—; el Papa Juan Pablo II, en su alocución a la hora del Angelus el día 28 de febrero, se refirió largamente a El Salvador, para lamentar

el dolor, las muertes de los salvadoreños, la intervención extranjera, y pedir por la paz y el entendimiento —sin referirse para nada a las elecciones, como han querido manipular algunos interesados—; por último, ningún país europeo enviará observadores a las elecciones, con la única excepción de Gran Bretaña.

Tres proyectos para la "pacificación" de la zona fueron públicamente presentados a finales del mes. El primero, por el FSLN en la reunión ya citada de COPPAL; en él se ofrecen acuerdos con los países vecinos, delimitación de fronteras y patrullajes conjuntos, relaciones amistosas para con USA, cooperación económica, desarrollar una economía mixta, mantenerse como "no alineados" y realizar elecciones a más tardar en 1985; a la vez que pide respeto a su soberanía y a su opción política. El segundo fue propuesto por el presidente mexicano, José López Portillo, en su visita a Nicaragua, y lo basa en mutuas concesiones y negociaciones, por medio del diálogo, un desarme paulatino y un sistema de pactos de no-agresión; en lo que se refiere a El Salvador, se extendió en analizar las causas estructurales del conflicto, en defender su postura conjunta con Francia, y en abogar repetidamente por el diálogo, la negociación y el uso de la razón para construir una sociedad justa y pacífica. El tercero fue propuesto por el presidente Reagan ante la OEA, y estuvo centrado en dos aspectos: la reactivación económica y la apertura del mercado norteamericano a productos de la región —excluyendo los competitivos—, y lo político-militar, con acerbas acusaciones a Cuba y Nicaragua, a la guerrilla salvadoreña, y con una velada amenaza de apelación al TIAR.

Las reacciones a estos tres proyectos fueron muy diversas. Mientras la propuesta nicaragüense fue bien aceptada por sus simpatizantes y, sobre todo, la de López Portillo recibió inmediato apoyo del Frente Sandinista, del FDR, de Cuba y de otros países y organizaciones, no fue ni siquiera mencionada por Reagan, a pesar de que pospuso un día su discurso, y se esperaba que la tomase en consideración. La propuesta de Reagan, por su parte, fue duramente criticada por los gobiernos y organizaciones anteriormente citados, e incluso al interior mismo de USA, pero recibió grandes alabanzas de los simpa-

tizantes norteamericanos; para el caso de El Salvador, el Ing. Duarte se presentó ante la TV a continuación del discurso en la OEA, para agradecer a Reagan su apoyo, y algo similar haría el canciller salvadoreño, así como la ANEP y otras entidades o partidos beneficiarios.

La política interna se mantuvo centrada en la campaña electoral, con una saturación de discursos y propaganda en los medios de comunicación. La tónica siguió siendo de ataques mutuos que descendían hasta insultos groseros de parte de algunos partidos —únicamente el PCN ha estado publicando en los periódicos los puntos principales que propondrá en la Constituyente, con su desarrollo y explicaciones—. Como consecuencia de esto el Consejo Central de Elecciones llamó la atención a ARENA y censuró uno de sus programas, lo que motivó que D'Aubuisson intercambiara palabras fuertes con el presidente de dicho consejo. Ese mismo día, en la noche, fue atacada la sede de dicho partido, y varios de sus dirigentes resultaron heridos; al día siguiente D'Aubuisson sufrió dos atentados, uno al helicóptero en que se dirigía a un mitin, y que no pudo aterrizar por los disparos que le hicieron, y el otro consistente en un disparo que le hirió en el hombro. Un día más tarde también la comitiva del PDC fue atacada en las proximidades de Jiquilisco, a donde se dirigía para su campaña —de hecho, el clima de inseguridad política es tal que los nombres de los candidatos a diputados se mantienen secretos, y los electores tendrán que hacer un acto de fe en el partido.— Las declaraciones de Duarte por TV, en las que trataba de justificar su gestión, rebatir ataques de sus oponentes y animar a ir a votar y a unir fuerzas frente al “enemigo común”, así como el anuncio de que los más altos funcionarios del gobierno iniciarían una serie de presentaciones por TV para explicar su trabajo, e irían por toda la república a presentar la gestión realizada, provocó inmediatamente la protesta de varios partidos y de la empresa privada que le acusó de utilizar esos medios para campaña proselitista.

Sin embargo, cada vez parece verse más claro que las elecciones no son la solución ni para el enfrentamiento armado ni para los problemas nacionales, como lo ha manifestado el embajador Hinton y el propio general

García; solamente parecen estar convencidos de la panacea electoral algunos partidos políticos, principalmente ARENA, la ANEP y la CEDES, que volvió a sacar otro comunicado apoyándolas y creyendo en ellas “a pesar de lo anormal de las circunstancias”. Un sondeo de opinión realizado entre los aspirantes a ingreso en la UCA muestra también la desconfianza tanto en el proceso electoral como en los diferentes partidos que se presentan a la contienda. Por su parte, el MNR, a la vez que felicitaba al candidato electo en Costa Rica, resaltaba que en El Salvador faltan todas las condiciones para unas elecciones auténticas y libres, por lo que deben ir precedidas de una negociación entre las partes en conflicto. También el Comité de Madres y Familiares de Presos y Desaparecidos Políticos se lamentó de que ningún partido se interese por los problemas reales del pueblo ni denuncie los atropellos, sino que se limitan a aparentar pelearse entre ellos.

Dos hechos cobraron cierta espectacularidad en el mes. El primero fue la aparición en TV de la Junta de Gobierno en pleno, el Fiscal General de la República y todo el Alto Mando militar —ante el gobierno, representaciones diplomáticas y periodistas nacionales y extranjeros—, para respaldar el discurso de Duarte en el que anunciaba que se entregaba a los tribunales a los 6 guardias implicados en el asesinato de las 4 religiosas norteamericanas; sin embargo, tanto el relato de los hechos como las acusaciones formuladas parecían más el dictado de la sentencia que el anuncio del procesamiento —Mons. Rivera comentaría en su homilía dominical que esperaba que fuera no sólo un gesto complaciente hacia USA para obtener más ayuda, y que había muchos más casos de asesinatos y violaciones (entre ellos el de Mons. Romero), para añadir luego a los periodistas que difícilmente un sargento puede dar tales órdenes sin recibir vía libre para ello—. Si a este hecho se añade la captura y publicidad del caso Roeder y su banda, y la de 18 miembros de la Defensa Civil acusados de cuatrerros, todo el conjunto parece indicar que no se pretende tanto el mostrar que en diversos cuerpos armados hay corrupción grave, cuanto que se está dando signos de intentos de controlar a los grupos de ultraderecha enquistados en ellos, para apoyar la tesis de Reagan.

El otro hecho fue el discurso del emba-

jador Hinton ante un grupo de empresarios y profesionales de administración de empresas. En él se refirió al pasado, a la incompreensión de la necesidad de las reformas, la dificultad de la reactivación económica y de la creación de un clima de paz, dada la polarización que tiende a ver las cosas como blancas o negras, y la tolerancia de estos sectores respecto a la violación institucional de derechos humanos que se ha acercado a un límite intolerable, lo que motivará el retiro de la ayuda norteamericana, y en su opinión "los que culpan por esta actitud de crítica a una conspiración de la prensa internacional o a otras influencias externas, no están encarando la realidad". No parece ser que la embajada norteamericana quiera tampoco encarar la realidad, a juzgar por la carta abierta que el Socorro Jurídico del Arzobispado le dirigiera, en la que se lamenta de la falta de palabra y colaboración en la investigación de la masacre de Morazán, por la que se le había acusado a esa oficina de parcial y se había acordado investigarlo conjuntamente.

Por otro lado, la crisis económica sigue profundizándose. El azúcar vio elevarse su precio, a pesar de la "congelación de precios y salarios". Empleados públicos se quejaron de que no les habían pagado sus salarios en enero. El aumento de las tasas de interés bancarias repercuten gravemente en las viviendas y no parecen favorecer a los ahorrantes. FENAPES denuncia la crisis y la codicia así como el haber perdido la oportunidad de solucionar los problemas con justicia y paz. La Cafetalera publica los datos declinantes del primer recurso económico nacional. Los ganaderos, en fin, protestan por la reducción del hato nacional en más del 40 o/o.

En el terreno militar hay que resaltar la intensificación de las acciones de parte del FMLN, que se elevaron a la cifra de 504 en el mes (se destacan los Departamentos de San Vicente con 114 acciones, de San Salvador con 110, de Usulután con 92 y de San Miguel con 45), entre las que se reportaron 87 de quemas de transportes, 47 sabotajes a la energía eléctrica, 33 controles de carreteras y 170 acciones propiamente militares (más 9 de ajusticiamientos). Tal vez los hechos más importantes —aparte de la quema de buses y control de carreteras que paralizó en gran parte el tráfico, especialmente hacia el oriente del país— hayan sido el hostiga-

miento por cinco días consecutivos a la ciudad de Usulután, con penetraciones hacia el centro de la misma, la toma de Tonacatepeque (que daría pie a la implantación de la ley marcial allí) y la de Nueva Trinidad (Chalatenango) que motivó una denuncia del COPREFA de que habían cometido una masacre de 400 personas de la población civil (la embajada USA la rebajaría a 40 tras una investigación, el FMLN reconoció la muerte de 10 paramilitares y de 16 soldados, y algunos periodistas dijeron no haber visto arriba de una docena de cadáveres); también resistieron los operativos montados por el ejército, e incluso dieron golpes sorpresivos en su retaguardia. Como resultado de todo ello, la F.A reconoció 62 bajas mortales en sus filas (1 teniente, 2 subtenientes, 4 sargentos, 5 sub-sargentos, 5 cabos y 45 soldados), pero atendiendo a otras fuentes fiables en el mes de febrero cayeron muertos 175 miembros de cuerpos militares y paramilitares.

Con la llegada del nuevo armamento facilitado por los Estados Unidos después del ataque a la base aérea de Ilopango, en especial con los nuevos helicópteros y aviones, se montaron grandes operativos, en los que cabe destacar uno primero a la zona de Usulután (Jucuarán) con quemas de bosques, pero que no lograron mayores objetivos, como tampoco en uno menor por San Vicente y Cabañas. Al finalizar el mes se montó otro tal vez más fuerte en el cerro de Guazapa (el 9o. de limpieza en dicho monte, según declaraciones públicas que se deben haber olvidado que ya en julio-agosto del año anterior también los titulares de los periódicos dijeron que aquél era el 9o de limpieza); los resultados tampoco parecen haber sido los esperados, a juzgar por los rumores de que se había relevado al comandante de la operación y nombrado a otro en su lugar, y por la publicidad que se le dio a la llegada del general García y de altos jefes a una de las cimas, desde las que se oía (según los diarios) el fragor de la lucha y el ruido de las ametralladoras en otras partes del cerro. Como consecuencia de la represión, en el mes perdieron la vida, de acuerdo a los diarios 532 personas de la población civil y fueron capturadas otras 86.

Pero fueron liberados el padre y el hermano del comandante del ERP, Villalobos, secuestrados el mes anterior; FENASTRAS

denunció la represión de que son objeto los trabajadores y los dirigentes sindicales; el Escuadrón de la Muerte (Maximiliano Hernández Martínez) desmintió que Roeder fuera de su grupo, ya que violaba su ética y era un simple mafioso; AEAS amenazó al gobierno y a la F.A. con irse al paro si no le garantizaban seguridad a los buses; y la repetida propuesta del FDR-FMLN y sus voceros oficiales, en cuanto a detener las hostilidades para negociar y establecer un gobierno de unidad, o caía en oídos sordos, o provocaba la negativa airada de diversas organizaciones oficiales o empresariales.

Para completar el panorama centroamericano del mes, baste indicar que en Costa Rica se tuvieron ordenadamente las elecciones, como es tradicional, y salió triunfador Luis Alberto Monge, del Partido de Liberación Nacional (socialdemócrata), quien prometiera previamente cortar abastecimientos de armas a las guerrillas salvadoreñas, a la par que mostraba desconfianza a la política de la Junta y solicitaba negociaciones; mientras el presidente Carazo pedía al próximo mandatario que tuviera el suficiente coraje para no aceptar las condiciones del FMI para la ayuda a su país, por el recorte que supone a las prestaciones sociales; sin embargo, Monge se enfrenta con graves problemas económicos, para los que no bastará tampoco la mayoría en la Asamblea Legislativa, el apoyo del FMI ni las medidas de austeridad anunciadas; descartó terminantemente la conformación de un ejército y solicitó ayuda de los países democráticos, para lo que ya anunció entre-

vistas con los presidentes de México, Venezuela, USA y Canadá. En Honduras la Asociación Nacional de Campesinos exigía la inmediata ejecución de la reforma agraria mientras el jefe del ejército amenazaba desbaratar los planes marxista-leninistas, y se mostraba anuente a la ayuda militar norteamericana que planea utilizar el país como base importante en el área. En fin, el canciller nicaragüense hizo una gira por USA y Europa, reiteró la disposición de su gobierno a establecer buenas relaciones con Estados Unidos y con sus vecinos; al tiempo que el ministro de defensa francés especificaba el armamento "no ofensivo" vendido a Nicaragua, incluidos helicópteros, cohetes antiaéreos, camiones y lanchas patrulleras.

Dos meses en los que, por la cercanía de las anunciadas elecciones, se intensifica la propaganda a la vez que se agudiza la controversia sobre si son o no una solución al conflicto, pero en los que la verdadera confrontación tanto militar como internacional se recrudece, cerrando aún más las puertas a un entendimiento racional, o tal vez, paradójicamente, abriéndolas, al demostrar que la vía armada no es ninguna solución.

Eugenio C. Anaya, h.

